

SEPTIEMBRE 25 DE 1933

57ª REUNION—Continuación de la Sesión Especial

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES JUAN F. CAFFERATA, HECTOR S. LOPEZ,  
ROBERTO F. GIUSTI Y ADRIAN C. ESCOBAR

MINISTRO PRESENTE: de hacienda, doctor Federico Pinedo; DIPUTADOS PRESENTES: Abalos Próspero, Acosta Abel, Agüero Santos, Aguirrezabala Miguel A., Ahumada Luis Alberto, Albarracín Belisario, Alonso Alfredo J., Amadeo y Videla Daniel, Amoedo Aurelio F., Andreis Fernando de, Antelo Mario, Araújo Ernesto M., Araújo José Ignacio, Argonz Joaquín, Bermúdez Manuel A., Besasso Domingo, Bianchiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Demetrio, Bunge Augusto, Bustillo José M., Buyán Marcelino, Cafferata Juan F., Calderón Osvaldo M., Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de las, Carús Agustín J., Castiglioni Eduardo, Castiñeiras Alejandro, Castro Felipe, Colombres Carlos G., Contte José A., Cornejo Arias Víctor, Corominas Segura Rodolfo, Coronel Carlos, Cortés Arceaga Alberto, Costa Méndez Nicanor, Costanti Gerardo, Courel Carlos P., Dávila Miguel V., Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Escobar Adrián C., Espil Alberto, Fernández Damián, Ferreira Antenor R., Fresco Manuel A., Ganza Marcelino, Garayalde José María, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Giusti Roberto F., Godoy Raúl, Gómez Hernán F., González Benjamín S., González Guerrero Manuel, González Maseda Manuel, González Valentín, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Guglielmelli Aquiles M., Harispe Albino H., Herráiz Pascual, Herrera Bruno J., Inda Rufino, Iribarne Alberto, Lamesa Juan B., Lazo Plácido C., Lima Vicente Solano, López Héctor S., Loredó José, Loyarte Ramón G., Luján Abdón P., Magris Amleto, Manacorda Carlos, Mancini Rafael, Martínez José Heriberto, Mayo Ramón, Messone Ricardo N., Molina Serapio, Moreira Alejandro F., Moret Carlos (h.), Morrogh Bernard Juan F., Mouchet Enrique, Mouesca Eduardo, Moyano Rodolfo, Navello Miguel B., Nigro Juan, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Ortiz Basualdo Samuel, Palacín José, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palisa Mujica Arturo, Palmeiro José, Parodi Misael J., Pascarelli Miguel, Pena José Luis, Pereira Clodomiro, Pérez Leirós Francisco, Pflieger José E., Pietranera Bruno J., Pintos Angel, Pressacco Juan P., Pueyrredón Carlos A., Quiroga Félix, Radio Pedro, Repetto Nicolás, Rocha Arturo da, Rodríguez Pinto Domingo, Rojas Marcos E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Guinazú Jacinto, Saggese Angel, Salas José Raquel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Scheo Lastra Dionisio, Sellarés Avelino, Sierra Bernardo, Simón Padrós Juan, Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel C., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Tourrés León P., Uriburu Francisco, Vicchi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Vignart Umberto F., Vionnet Rodolfo L., Zalazar Altamira Benjamín, Zabazaga Marcial J., Zerda Justiniano de la; AUSENTES, CON LICENCIA: Bordabehere Enzo, Martínez Erasmo, Vega Abraham de la; CON AVISO: Bosano Ansaldo Daniel, Carreras José, Frías Silva Raúl, Martella Julio C., Mosset Iturraspe Mario; SIN AVISO: Becerra Eugenio A. (h.), Mattos Luis María, Palacio Benjamín, Parera Gregorio, Pomponio Vicente E.

## SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Aclaración de los señores diputados Contte y Ahumada acerca de correcciones introducidas en la versión taquigráfica de la sesión del día 22 del corriente.
- 3.—Homenaje a la memoria del ex diputado doctor Manuel F. Gnecco.
- 4.—Orden de la labor de la Honorable Cámara.
- 5.—Indicación del señor diputado González (B. S.) para dar curso a los asuntos entrados.
- 6.—Asuntos entrados:

- I.—Peticiónes particulares.
- II.—Despachos de comisión.

- III.—Proyecto de ley del señor diputado Godoy sobre modificación del artículo 4º de la ley 11.288, de patentes.
- IV.—Proyecto de ley del señor diputado de la Zerda y otros, sobre intervención federal a la provincia de San Juan.
- 7.—Consideración del despacho de la Comisión Especial Parlamentaria encargada de estudiar el régimen legal de la propiedad intelectual.
- 8.—Orden de la labor de la Honorable Cámara.
- 9.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General en las modificaciones introducidas por el Ho-

norable Senado en el proyecto de ley sobre reformas al Código de Comercio en lo relativo a empleados de comercio.

- 10.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General en las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley sobre prórroga de obligaciones hipotecarias.
- 11.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley sobre exoneración de multas a los deudores morosos de varios impuestos.
- 12.—Moción del señor diputado Dickmann (A.); aprobada, para pasar a cuarto intermedio.

—En Buenos Aires, a veinticinco de Septiembre de 1933, siendo la hora 15 y 30:

## 1

## MANIFESTACIONES EN MINORIA

**Sr. Gómez.** — Pido la palabra.

El bloque de la derecha se encuentra sesionando y me ha destacado para que solicite de la Honorable Cámara unos minutos de espera.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Si hay asentimiento, se esperará quince minutos.

—Asentimiento.

—Se continúa llamando.

## 2

## ACLARACIONES

A la hora 15 y 38:

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Continúa la sesión con la presencia de 81 señores diputados.

**Sr. Contte.** — Pido la palabra para una breve aclaración.

En el boletín de la Cámara correspondiente a la sesión que se realizó el viernes 22 hasta la madrugada del día 23, se consigna en la página 92 del presente tomo, como pronunciado por

mí, lo siguiente: «Es interesante esa declaración y conviene que conste. No se trata de un empréstito a las provincias». Hay ahí un evidente error; lo que yo afirmé, es precisamente lo contrario. Y en la prueba de la versión taquigráfica que he solicitado a la Dirección de Taquigrafos, no consta la palabra «no»; ha sido agregada posteriormente con tinta y no se sabe por quién, lo que constituye un hecho muy grave. Como ese agregado cambia fundamentalmente el sentido del concepto que yo expresé, dejo constancia de esta aclaración.

La afirmación mía está más adelante corroborada por esta otra frase que figura en la página 97 del presente tomo del mismo número del Diario.

«El miembro informante de la mayoría ha manifestado que se trata de un empréstito o préstamo de la Nación a las provincias. Eso tiene suma importancia y conviene que quede perfectamente esclarecido en el Diario de Sesiones, para las ulterioridades del caso.»

Eso no tuvo rectificación de nadie en ese instante.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Queda aclarado.

**Sr. Ahumada.** — Pido la palabra.

Deso también hacer una rectificación a las constancias del Diario de Sesiones.

En la página 104 del presente tomo aparece el siguiente diálogo:

«**Sr. Presidente (Fresco).** — Continúa con la palabra el señor diputado.

**Sr. Ahumada.** — Continúa con la lectura.

«**Sr. de la Zorda.** — Usted, señor diputado es de los que más leen y nadie le dice nada. Yo leo porque se trata de un informe oficial. No se olvide de echar el poncho al hombro cuando haga frío, compañero. (Hilaridad).»

Quiero hacer dos observaciones. En primer lugar, lo que dije es lo siguiente: «Continúa con la lectura... Pero es una falta de valentía venir al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, a atacar a un gobernador de provincia con la lectura de textos escritos a máquina.»

el período de sesiones sin que la ley a que me refiero haya podido ser sancionada, sobre todo si tiene que volver en revisión al Honorable Senado.

La ley del petróleo es una ley necesaria, pero no tiene urgencia ni perspectiva de ser convertida en ley en este período. Tratarla, sólo significará dificultar la sanción de otros asuntos. No pretendamos despachar lo que no podrá obtener sanción definitiva. Es preferible que esa ley pueda estudiarse y meditarase más el año que viene.

En cambio, respecto de la ley de moratoria hipotecaria, hay un verdadero clamor público y el Congreso no sabría interpretarlo si postergara su sanción irrogando graves consecuencias. Por eso considero que no deben hacerse mociones que en realidad importan la postergación definitiva de una sanción tan urgente como indispensable.

**Sr. Aguirrezabala.** — Mi moción es de que se trate con o sin despacho de comisión.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Tiene despacho.

**Sr. Aguirrezabala.** — Como algunos diputados me dijeron que no lo tenía...

**Sr. Martínez (J. H.).** — Hay que informarse. Ahora hay campeones nuevos de la moratoria y los que hemos despachado el asunto aparecemos como oponiéndonos.

**Sr. Dickmann (A.).** — Pido la palabra.

Voy a ver si puedo otra vez hacer una moción que concilie las distintas proposiciones. Evidentemente el asunto de la moratoria hace que por un motivo u otro estemos en mora en su sanción. Ya hemos dicho muchas veces que el Congreso debe despacharlo; y ponerlo al final del tren de trabajo, significará en realidad no tratarlo.

Propongo que sigamos tratando, con la brevedad que todos hemos convenido, el asunto del artículo 157 del Código de Comercio y que tratemos inmediatamente después, la moratoria y la exención de multas y luego, si los señores diputados quieren, el Presupuesto y lo demás del plan. ¿Qué sucederá? Que demoraremos por veinte minutos más la iniciación de la discusión del

presupuesto. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

**Sr. Martínez (J. H.).** — Eso es práctico y menos tiempo habríamos puesto en votar la moratoria si hubiéramos considerado el despacho de la comisión. Adhiero a la proposición del señor diputado.

**Sr. Mancini.** — Acepto la moción del señor diputado Dickmann.

**Sr. Presidente (López).** — Se va a votar la moción del señor diputado por la Capital.

**Sr. Secretario (González Bonorino).** — Que consiste, según lo indicado por el señor diputado Aguirrezabala, en lo siguiente: a continuación de las reformas del Código de Comercio, moratoria hipotecaria y condonación de multas referentes a impuestos.

**Sr. Dickmann (A.).** — El señor diputado Aguirrezabala propuso que la moratoria se tratara después del presupuesto, y yo formulé la moción de que se tratara inmediatamente.

**Sr. Aguirrezabala.** — He adherido a la moción del señor diputado porque es más práctica para lograr lo que yo quería.

**Sr. Presidente (López).** — Se va a votar la moción del señor diputado por la Capital, de que acaba de dar cuenta la Secretaría.

— Resulta afirmativa.

9

## EMPLEADOS DE COMERCIO

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación General ha estudiado las modificaciones del Honorable Senado al proyecto que le fué pasado en revisión sobre reforma de los artículos 154 a 160 del Código de Comercio; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja a vuestra honorabilidad la insistencia en su primitiva sanción.

Sala de la comisión, Septiembre 25 de 1933.

Carlos D. Gourl. — Próspero Abalos.

— Silvio L. Ruggieri. — Enrique

Dickmann. — Agustín J. Carús. —

Luis Grisolia. — Carlos G. Colom-

bres. — Bernardo Sierra.

Buenos Aires, 22 Septiembre de 1933.

*Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.*

Tengo el honor de comunicar al señor presidente que el Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha considerado el proyecto de ley, en revisión, sobre reforma de los artículos 154 a 160 del Código de Comercio, y ha tenido a bien aprobarlo en la siguiente forma:

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Modifícanse los artículos 151, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 del Código de Comercio, en la siguiente forma:

«Artículo 154. — Los factores, dependientes y todos los demás empleados auxiliares, así como los obreros contratados por un comerciante para realizar tareas que conciernen a su negocio, son responsables, ante sus principales, de cualquier daño que causen a sus intereses por dolo, culpa o negligencia.»

«Artículo 155. — Los accidentes y las enfermedades inculpables que impidieren el ejercicio de sus funciones a los factores, dependientes, empleados y obreros del comercio, con tres meses como minimum de antigüedad en el cargo, que trabajen a sueldo, jornal, comisión u otro modo de remuneración, sea en dinero o en especie, alimentos o uso de habitación, no les privarán del derecho de percibir íntegramente dichas retribuciones hasta tres meses de interrupción, si tienen una antigüedad en el servicio que no exceda de diez años, y hasta seis meses, si tienen una antigüedad mayor, con media retribución durante los tres meses últimos.

La retribución mensual que en estos casos corresponda al empleado se liquidará de acuerdo con el promedio del último semestre.

El empleado conservará su puesto, sin goce de sueldo, hasta seis meses después de transcurridos los plazos indicados precedentemente de tres a seis meses.

En caso de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, regirán las disposiciones de la ley 9.688 y sus decretos reglamentarios.

El derecho al cobro de salarios en caso de impedimento por enfermedades inculpables no excluye la indemnización por daño o pérdida extraordinaria que sufra el empleado

durante el servicio que presta al principal y que estará a cargo de éste.

El empleado también conservará su puesto, sin goce de sueldo, cuando deba prestar servicio militar por llamamiento ordinario, movilización o convocatorias extraordinarias, hasta treinta días después de terminadas sus obligaciones militares.

Los empleados suplentes, contratados especialmente para reemplazar a los que están cumpliendo obligaciones militares, a los que se encuentran impedidos por enfermedad o con goce de vacaciones, cesarán en el momento de la reincorporación de aquellos a quienes respectivamente substituyan, sin que el empleador esté obligado a otorgarles el plazo de preaviso.»

«Artículo 156. — El empleado de comercio, factor dependiente u obrero, gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual, conservando la retribución que recibe durante el servicio, liquidada de acuerdo con el artículo anterior, por los siguientes términos:

- a) Diez días, cuando la antigüedad en el servicio no exceda de cinco años;
- b) Quince días, cuando siendo mayor de cinco años la antigüedad no exceda de diez;
- c) Veinte días, cuando la antigüedad es mayor de diez años y no exceda de veinte;
- d) Treinta días, cuando la antigüedad en el servicio es mayor de veinte años.

Queda reservada al principal la elección de la época en que regirá el período de descanso.»

«Artículo 157.

- 1º No estando determinado el plazo del empeño que contrajeran los factores, dependientes, empleados y obreros del comercio con sus principales, puede cualquiera de las partes darlo por disuelto avisando a otra su resolución con un mes de anticipación, si la antigüedad en el servicio no excede de cinco años, de dos meses si es mayor y no excede de diez años y de tres meses si es de más de diez años. Puede convertirse en un plazo mayor de preaviso.

El plazo de preaviso correrá desde el último día del mes en que

se comunica la cesantía y la notificación deberá hacerse por escrito.

Durante el plazo de preaviso el empleado gozará de una licencia diaria de dos horas dentro de su jornal normal de trabajo, sin que disminuya su sueldo o jornal, comisión u otro modo de remuneración; queda reservada al empleador la determinación de las horas que diariamente tendrá libres el empleado.

En caso de cesantía, sin aviso previo, el principal abonará al empleado la retribución que corresponda al plazo legal de preaviso.

Este derecho no se acuerda al empleado que no tenga por lo menos tres meses de antigüedad en el servicio;

2º La suspensión de tareas por más de tres meses, en el período de un año, ordenada por el principal y la rebaja injustificada de la remuneración, puede ser considerada por el empleado como despido sin preaviso;

3º Corresponde la indemnización por despido sin preaviso, cuando se produzca la cesación o liquidación del negocio, que no sean determinadas por fuerza mayor; en caso de cesión o cambio de firma o cuando la precedente no haya dado el aviso previo en los plazos establecidos, pasarán a la nueva firma las obligaciones de este artículo y las de los dos anteriores. En caso de quiebra los factores, empleados y obreros del comercio tienen derecho a la indemnización;

4º Cuando el contrato de empleo se disuelve por voluntad del empleado, éste deberá preavisar al principal en la misma forma y plazos establecidos en este artículo y en su defecto, pagará la misma indemnización por falta de preaviso impuesta para el principal;

5º Las indemnizaciones por falta de preaviso que correspondan al em-

pleado, y a las acordadas por el párrafo 5º del artículo 155, no están sujetas a moratorias, ni embargos y regirá a su respecto lo dispuesto para salarios y sueldos en el artículo 4º de la ley número 11.278; estas indemnizaciones gozarán de privilegio general sobre los bienes del comerciante fallido;

6º Serán nulas y sin ningún valor todas las convenciones que dejen sin efecto o reduzcan las obligaciones determinadas en el presente artículo y en los dos anteriores.»

«Artículo 158. — Existiendo plazo estipulado por escrito en el contrato de empleo, las partes no pueden, arbitrariamente, separarse de su cumplimiento. La parte que lo hiciere estará obligada a indemnizar a la otra los perjuicios que por ello le sobrevengan.

Para la fijación de los perjuicios se tendrán en cuenta los usos, la naturaleza de los servicios comprometidos, el tiempo transcurrido y en general todas las circunstancias que sirvan para determinar su extensión.

Sólo se aplicarán a esta clase de contratos las disposiciones para el despido, como si fueran con plazo indeterminado, cuando la inclusión del término de duración no resulte justificada por la clase de servicios y los usos del comercio y aparezca el propósito de haber sido incluido con el fin de eludir obligaciones.

Puede estipularse previamente, también por escrito, un período de prueba no mayor de tres meses; durante este período la rescisión del contrato se podrá hacer en cualquier momento sin lugar a indemnización.»

«Artículo 159. — Se considera arbitraria la inobservancia del contrato entre el principal y su factor, dependiente, empleado u obrero, siempre que no se funde en injuria que haya hecho el uno a la seguridad, al honor, o a los intereses del otro o de su familia.

Esta calificación se hará prudencialmente por el juez competente, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que median entre empleadores y empleados.

También puede el empleado dar por rescindido el contrato por falta de pago o mora en la remuneración convenida y por las modifi-

eaciones introducidas sin su consentimiento en el reglamento del trabajo, en cuanto al tiempo y modo de efectuarse éste.

Con respecto a los principales, son causas para que puedan rescindir el contrato con sus empleados y obreros:

- a) Los casos del artículo 154 y todo acto de fraude o abuso de confianza cometido por el empleado u obrero;
- b) La ineptitud o imposibilidad para cumplir las tareas convenidas;
- c) Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al trabajo; la indisciplina o desobediencia reiterada a las órdenes y reglamentos de trabajos; y
- d) Negociación por cuenta propia o ajena, sin expreso permiso del principal.

No serán obligatorios el preaviso de rescisión ni la indemnización, cuando el contrato se declare disuelto por algunas de las causales de este artículo.»

«Artículo 160. — Los principales están obligados a llevar un libro especial que tendrá todas sus hojas numeradas y rubricadas por el Departamento Nacional del Trabajo en la Capital y gobernaciones nacionales y por las oficinas respectivas en las provincias, en el que se hará constar el nombre de los factores, dependientes, empleados y obreros, fecha de su ingreso, salida, sueldos, salarios, comisiones, gratificaciones y otras remuneraciones que perciban, y demás datos a que se refieren los artículos 155, 156, 157 y 159 de este código.

Cuando los empleadores estén comprendidos en la obligación de llevar el libro de registro de sueldos y jornales que prescribe la reglamentación de la ley 9.688, podrán utilizarlo para cumplir también con las obligaciones expresadas precedentemente.

Terminado el contrato de empleo, el principal está obligado a entregar al obrero o empleado un certificado de trabajo indicando su naturaleza y antigüedad en el mismo.

Las acciones derivadas de los artículos 155 a 159 de este código, se tramitarán por los procedimientos que las leyes respectivas establezcan para los juicios sumarios.»

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
Dios guarde al señor presidente.

JULIO A. ROCA.  
Gustavo Figueroa.

**Sr. Presidente (López).** — En consideración.

**Sr. Courel.** — Pido la palabra.

El plan de trabajo dispuesto por la Honorable Cámara, por el que ha resuelto tratar las reformas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de reformas de los artículos 154 a 160 del Código de Comercio, obliga a la Comisión de Legislación General, por mi intermedio, a expresar en la forma más breve posible las razones que la han determinado a insistir en su primitiva sanción.

No ha sido posible al miembro informante traer una cantidad de antecedentes que abonaran la tesis ya suscitada, cuando la Cámara sancionó este despacho, ya que las enmiendas introducidas por el Senado no han logrado destruir los argumentos que en esa época se hicieron y si hay algunos, ellos serán destruidos con pocas palabras, ya que diarios de prestigio como «La Prensa» se han encargado de hacerlo brillantemente con anterioridad.

Este diario, al referirse al despacho del Honorable Senado, ha dicho: «Pero la Comisión de Códigos de la Cámara de Senadores, por mayoría, ha reducido la indemnización a proporciones irrisorias: un mes de sueldo hasta los 10 años de servicio; dos meses hasta los 20 años y tres meses hasta los treinta años. *Esto no sería indemnización, sino limosna.* La minoría de esa comisión aconseja que se apruebe la sanción de la Cámara de Diputados. Es lo que debe hacer el Senado y si se decide por el temperamento que propiciamos — el asunto tiene señalada preferencia — habrá contribuido a sancionar una de las leyes más equitativas que se hayan dictado en estos últimos tiempos y a llevar la tranquilidad, con respecto a su porvenir, a una parte considerable de la población de la República sumamente meritoria, como que se trata de gente trabajadora por definición y que no se ha valido de la influencia política para acomodarse — la expresión es muy propia — en los presupuestos oficiales».

En el Honorable Senado se han hecho objeciones que podría dividir las en dos

clases: objeciones que llamábamos constitucionales y objeciones de carácter jurídico. Las de orden constitucional se han referido: primero, a la forma de legislar en la materia; segundo, a la inviolabilidad de la propiedad privada y tercero, a la retroactividad dada a la ley, desde el 1º de Agosto de 1932.

En cuanto al primer punto, los argumentos están contenidos en el discurso del señor miembro informante cuando dijo: «He sostenido, señor presidente, que el proyecto en revisión de la Cámara de Diputados que acuerda una indemnización extraordinaria para toda clase de contratos, en toda suerte de servicios, es inconstitucional y atentatoria contra garantías fundamentales de la inviolabilidad de la propiedad privadas. Y — agregaba — que aparte de ser inconstitucional, es también contraria a todo principio de legislación no sólo en materia civil y comercial, sino especialmente en el campo del derecho obrero. Y es precisamente por esta razón que no se encuentra semejante institución en ninguna de las leyes que he citado de los países más adelantados sobre la materia; que el proyecto en revisión substituye el régimen contractual de nuestras leyes civiles y comerciales, sin provecho alguno, para empeorarlo, confundiendo las dos clases de contratos que se diferencian en todas las legislaciones en, con plazo y sin plazo, sometiendo los por igual a los plazos de despidido y disposiciones que siempre los han diferenciado.

En otra parte de su discurso, el señor miembro informante expresa el mismo concepto en los siguientes términos: «Los poderes constitucionales del Congreso que le permiten restringir el derecho de usar y de disponer de la propiedad particular, no pueden llegar a ser atentatorios al principio fundamental de la inviolabilidad de la propiedad privada, privando de ella a sus dueños, perjudicándolos arbitrariamente en sus bienes. El Poder Legislativo puede limitar el régimen de la propiedad por circunstancias excepcionales, transitorias y de emergencia, sólo por el tiempo que graves razones de interés público lo requieran; pero no puede trastornar el orden

jurídico existente en leyes permanentes, destinadas a regir una situación normal en lo económico y en lo jurídico.»

Estas objeciones, a juicio de la comisión, hubiesen quedado perfectamente rebatidas con el discurso que pronunciara el senador Matienzo, quien con la autoridad que le ha dado su cátedra universitaria, su cantidad de libros de derecho publicados en materia constitucional, y su notoria versación sobre la materia, acredita y justifica cualquiera de las opiniones que pudiera emitir y cualquiera de los conceptos que pudiera expresar cuando se refiere a la parte constitucional de un asunto cualquiera.

El doctor Matienzo, contestando los argumentos del miembro informante, dijo:

«He recorrido desde el artículo 1º hasta el 110 de la Constitución, para ver si alguno impide la protección legal de los dependientes de comercio, y no he encontrado, señor presidente, ninguna disposición que se oponga a esa protección legal.»

Más adelante agregaba:

«Lejos, señor presidente, de que se oponga la Constitución a la protección de los débiles contra los fuertes, vemos en el preámbulo de la Constitución autorizada esa protección, cuando dice que uno de los objetos fundamentales de la Constitución, es «afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el territorio argentino.»

Y al referirse al segundo y tercer puntos, dice:

«La existencia de códigos es un accidente en la legislación constitucional argentina: Alberdi, que propuso la Constitución, no propuso los códigos, dijo, sencillamente, que el Congreso legislará en materia civil, comercial y penal. Fue el Congreso Constituyente, a proposición de algún diputado más abogado que constitucionalista, el que estableció la frase, «el Congreso dictará los códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería». Pero Alberdi, comentando esta cláusula en su *Sistema Rentístico y Económico*,

dijo que esta facultad del Congreso de dictar los códigos, no es una obligación de dar forma de código a toda la legislación civil, comercial y penal. De modo que el Congreso puede hacer lo que le parezca; dictar un código comprendiendo en un solo tomo toda la legislación civil, o puede reglamentar esas materias por leyes sueltas.

«Alberdi era partidario de las leyes sueltas, porque decía que así las reformas son más fáciles; y se puede modificar una ley suelta cuando sale mala, pero es muy difícil modificar totalmente un código».

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Negocios Extranjeros y Culto, doctor Adrián C. Escobar.

Y bien, señor presidente: el argumento de carácter constitucional hecho por el miembro informante de la mayoría de la Comisión de Códigos del Senado, sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, es absolutamente inaplicable a las leyes de carácter social, porque si lo fuera, no habría ley del trabajo que no fuera reputada inconstitucional.

Tampoco es aceptable lo que ha expresado con respecto a la retroactividad de la ley. El artículo 2º sólo reconoce a los empleados una antigüedad de cinco años anterior a la sanción de la ley, como lo han reconocido todas las leyes de beneficio social, entre ellas la de jubilaciones, que reconoció la antigüedad anterior a su sanción, sin limitación alguna.

En cuanto al artículo 3º que establece que las disposiciones sobre el despido se aplicarán desde el 1º de Agosto de 1932, tiene por objeto impedir que los empleadores liquidaran el personal con numerosos años de servicios, en conocimiento de que el Congreso estudiaba las reformas al Código de Comercio, para eludir así el pago de las indemnizaciones que el proyecto establece.

Por otra parte ¿cómo ha de atentar-se contra el principio constitucional

de la inviolabilidad de la propiedad privada porque se otorgue indemnizaciones al empleado u obrero despedido sin causa? ¿Acaso las leyes de estabilidad del empleado atentan contra ese principio? ¿Las leyes de jubilaciones de empleados particulares no están en la misma categoría que ésta?

Se habla también de que la legislación proyectada no encuadra dentro de la legislación comercial, tomando seguramente el concepto inglés sobre *master and servant*, sobre locación de servicios, y su diferencia con la del Código Civil. Ello importa confundir una cuestión con otra. Las principales leyes dictadas en los últimos diez años han sido leyes de gremios y para gremios y a nadie se le ha ocurrido hacer un código especial que regle las distintas situaciones entre patrones y obreros.

En muchas de esas leyes se han alterado los principios fundamentales regidos por los códigos, como en el caso de la ley de accidentes del trabajo, el principio de la reversabilidad de la prueba, el concepto de la responsabilidad patronal, la culpa e indemnización, sin que a nadie se le haya ocurrido cambiar estos principios.

Los argumentos jurídicos hechos en el Honorable Senado por el miembro informante de la mayoría de la Comisión de Códigos, pueden resumirse en dos. El primero se refiere a los contratos de empleo a plazo fijo, sobre los cuales no es concebible, según el senador informante, el pago de indemnización por despido; y el segundo, el hecho de que los códigos Civil y Comercial distinguen expresamente los contratos a plazo determinado y los a plazo indeterminado.

Cabe significar, en primer lugar, que no son aplicables a la técnica jurídica de los códigos citados las leyes de carácter social, que están concretadas en normas generales destinadas a contemplar situaciones de notoria injusticia social. Un contrato de plazo determinado o no determinado en materia de servicios irregulares no es discutible, pero un contrato destinado a reglar situaciones de suyo permanentes, como son las

del empleado de comercio, cuya especialización y eficacia se adquieren después de varios años de trabajo, no tendría razón de existencia, ni es posible admitir un distingo relativo al plazo, si no es con el propósito de anular los fines de la ley, que no es de protección, sino de prevención. Las leyes no sólo deben dictarse para reglar situaciones concluidas, sino también para evitar que ellas puedan llegar a no aplicarse.

De modo que, con referencia al despido e indemnización de los contratos a plazo fijo, el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados no ha hecho sino evitar la burla de la ley, pues no establecerlo en esos contratos sería dejar en manos de los empleadores el cumplimiento de los fines de esa ley, pues contratarían el personal por sucesivos contratos de corto plazo. Fué menester, pues, mediante esa sanción, nivelar un poco la enorme desigualdad para contratar en que se encuentran los empleadores y empleados.

En ese mismo orden de ideas, el precedente legislativo inmediato lo encontramos en la ley 11.157 que reforma diversos artículos del Código Civil referentes a la locación, si bien es cierto que aquella fué una ley de emergencia, a pesar de lo cual establecía a favor del inquilino un plazo de año y medio, durante el cual no puede exigirse la entrega de la cosa locada, no obstante que haya pactado con el propietario un contrato de término menor.

Para no fatigar a la Honorable Cámara debo remitirme a todo lo que se expresó sobre esta cuestión en el debate que se hiciera en el Cámara de diputados.

Bien, señor presidente; para concluir diré que es necesario que el Honorable Senado recapacite sobre la sanción dada y que quede bien establecido y claro que las leyes, como expresión concreta en el campo jurídico, no puede olvidarse que encuentran su base en otras actividades más concretas del hombre, más substantivas, cuales son las relaciones de orden económico, afectivo, religioso, moral, etcétera, y que por lo tanto, variando las actividades que las sustentan

y les dan nacimiento, deben necesariamente variar las leyes. Tanto es así, que cuando las leyes son anticuadas o no son la auténtica expresión del espíritu de la época en que fueron dictadas, su violación o falta de cumplimiento es el resultado más inmediato. No queremos con esto significar que la legislación a dictarse deba ser tan previsora en esta materia como podría exigirse a una legislación aplicable al campo de la técnica. Pero ello mismo está demostrando la conveniencia de dictar una legislación adecuada a la época presente, incorporando y dando carácter imperativo a ciertas normas inspiradas en un sano principio de solidaridad social, tanto más cuanto esas normas han pasado ya a la categoría de instituciones consagradas por los usos y las costumbres.

El despacho que está a consideración de la Honorable Cámara lleva la firma de los representantes de todos los sectores, quienes aconsejan la insistencia en el proyecto sancionado por la Cámara anteriormente.

Por estas consideraciones, y con el fin de corregir la situación de desamparo en que el Código de Comercio deja a un numeroso grupo de empleados y obreros, la Comisión de Legislación General ha resuelto aconsejar la insistencia en la primitiva sanción de la Cámara, considerando que con este acto habremos dado un paso más en el camino de la concordia y solidaridad entre empleados y empleadores.

La Cámara incorporará así, a la buena legislación social sanos principios de justicia y de equidad que demuestran, que la Cámara de Diputados de la Nación del año 1933, vive la inquietud de la época presente. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Ruggieri.** — Pido la palabra.

Como acaba de expresar el señor diputado por Córdoba, doctor Courel, la Comisión de Legislación General, por unanimidad, aconseja a la Cámara la insistencia en su sanción anterior.

El proyecto votado el año pasado fué el fruto de una transacción, primero en el seno de la comisión y después en el recinto. Su texto era la mejor refutación a las críticas, formuladas con ligereza

que puse de manifiesto, contra el despacho primitivo. -

Reconociendo la indemnización por despido, variable según los años de servicios, se establecieron las siguientes limitaciones que no figuraban en los proyectos presentados. La indemnización de un mes de sueldo por cada año de servicio se redujo a la mitad; la antigüedad en el servicio anterior a la ley, que a los efectos de la indemnización reconocían los proyectos sin límite alguno, fué limitada por la comisión a diez años, para que su despacho fuera subscripto por la unanimidad de sus miembros; y que en el recinto, al discutirse en particular, a proposición del señor diputado por Mendoza, doctor Viechi, — en votación nominal, en la que el sector socialista se pronunció en contra — se redujo de nuevo esa antigüedad a cinco años de servicio. Votaron 77 diputados por la de cinco años, y 49 por la de diez. Por último, se fijó la suma de 500 pesos como límite máximo de la indemnización por cada año de servicios.

De lo expuesto se infiere que después de reducir en un 50 % la indemnización por año de labor y de desconocer toda la antigüedad mayor a 5 años de servicios, con lo que se liquidó la esperanza de los empleados envejecidos en el trabajo y que tenían al servicio de un mismo empleador 15, 20 o más años de antigüedad en el momento en que se sancionara la ley, muy modesto era lo que había acordado la sanción de esta Cámara.

El Senado ha dedicado varias sesiones a la discusión del despacho de la mayoría de su Comisión de Códigos, que ha ofrecido esta anomalía evidente: so color de aprobar un proyecto de beneficio para los empleados, ha suprimido de raíz lo que fué motivo de nuestro voto; ha eliminado en absoluto la indemnización por cesantía o despido. Solución tan indefendible fué ampliamente impugnada por los dos senadores socialistas, doctores Bravo y Palacios, por el señor senador por Córdoba doctor Ceballos y por el señor senador por Tucumán doctor Matienzo, que destruyó, en una síntesis magistral, el supuesto, vagamente insinuado, de la inconstitucionalidad de esta ley. Pero, en definitiva,

por sólo un voto de mayoría, el Senado aprobó el despacho de la Comisión de Códigos, suprimiendo sin piedad el beneficio que desde hace tantos años reclamaban los empleados de comercio, que fué votado por unanimidad de los miembros presentes de esta Cámara — 126 — el año anterior, y de los cuales, puntualizo nuevamente, 77 limitaron a 5 años el reconocimiento de la antigüedad en el servicio anterior a la ley y 49 lo admitían hasta un término de diez.

Desde el punto de vista de la erogación que ese beneficio representa para los empleadores no había exceso legislativo si se tiene presente que lo reconocido a los empleados, en el momento de aprobarse la ley, eran dos meses y medio de sueldo para los que tuvieran una antigüedad mayor de 5 años, y medio mes de sueldo por cada año de servicios para los que no alcanzaran esa antigüedad. Esa magra indemnización ha sido rechazada por la mayoría del Senado, sin que se expresara un solo argumento serio que pudiera recogerse para su refutación en esta Cámara.

Voy a traducir, señor presidente, con la fidelidad que siempre debemos al país, el pensamiento en que ha fundado la mayoría de la Comisión de Códigos el rechazo de esa indemnización. Se ha consignado en tres párrafos que ocupan 16 renglones en un discurso de 20 columnas del Diario de Sesiones: «Si hay contrato de empleo privado, de plazo fijado, y las partes no se apartan arbitrariamente de su ejecución, el contrato queda terminado, llegado el vencimiento del plazo. Si el contrato es de plazo indeterminado y las partes cumplen con la obligación de dar el despido en los términos y forma del Código de Comercio, el contrato queda como de plazo determinado, concluyendo las obligaciones de las partes al vencimiento del plazo de despido.» Y por último: «Extinguido el contrato por el vencimiento del plazo y por el cumplimiento de todas las obligaciones legales, el Código de Comercio no tiene ya materia sobre qué legislar: en sus artículos no se

puede encontrar el remedio contra la desgracia, la desocupación o la invalidez.»

¡Hé ahí el secreto jurídico del repudio al amparo legal de los empleados de comercio! ¡Un contrato que termina por la voluntad de las dos partes, empleador y empleado, o por la de una sola de ellas, exteriorizada a tiempo, no da para obligaciones no convenidas, ni autoriza a reparar la desgracia, ni la invalidez, ni la desocupación!

Esa sorprendente consecuencia se debe al arcaísmo jurídico que todavía impera en el Senado, que no concibe la función del Estado ejercida por encima de la voluntad aislada de los intereses en conflicto. Gravita todavía sobre el espíritu de su mayoría el viejo concepto de la «libre contratación». No admite que pueda ser impuesta por la ley, si en un contrato de trabajo o de empleo no se estipula la obligación patronal de indemnizar en caso de despido.

No se tiene presente que la teoría de la libre contratación es notoriamente falsa, porque supone igualdad de condiciones en los contratantes, armas de discusión equivalentes, libertad para optar o no por la celebración del contrato.

Sostengo que no concurren esas circunstancias en el contrato de empleo o de trabajo. La desigualdad entre el patrón y el obrero, entre el principal y el empleado, es evidente. El primero es dueño de los instrumentos de trabajo y de la materia prima; tiene capital acumulado de reserva para atender sus necesidades, cuenta a su favor con la abundancia de fuerzas de trabajo, con la desocupación obrera; en una palabra, con libertad de acción.

El obrero, sin otro capital que el de su inteligencia y el de sus brazos; esclavo de la herramienta y de la materia prima que no le pertenecen; necesitando vivir, sin reservas que lo defiendan, no tiene otra libertad que la de la miseria o de la capitulación.

Contra esos defectos de la libertad de contratar, surge en los hechos el

derecho a la asociación obrera, la acción sindical y política de los trabajadores, determinantes de la intervención del Estado y de la ley.

La intervención del Estado en los problemas del Trabajo se ha ido elaborando a través de una legislación especial, de derecho público, al margen de los códigos comunes. En general, estos últimos regulan las obligaciones por contrato de acuerdo con la voluntad de las partes. Menger ha observado, con razón, que el verdadero fundamento de la libertad del contrato es que en la esfera de las relaciones relativas a obligaciones por deudas hay un conflicto de intereses económicos, entre patrones y obreros, entre ricos y pobres, siendo necesario dejar a los ricos las manos libres para percibir rentas sin trabajar. Por eso propicia, como todos los escritores socialistas, en el campo jurídico, que la legislación, en las relaciones derivadas de los contratos, debe señalar o imponer un contenido típico, entre cuyos límites debe moverse la voluntad libre de las partes.

El mismo autor ha observado, refiriéndose al último Código Civil alemán, que en las instituciones jurídicas donde no surge el antagonismo de clases no impera el principio de la «libertad del contrato». Tal lo que ocurre con los derechos reales, los derechos que afectan las cosas; con el matrimonio; con las relaciones de padres e hijos; con la tutela y aún con los derechos de propiedad derivados de las relaciones de familia. Todos esos derechos están determinados por la ley, que es, en definitiva, la que fija sus límites, que escapan a las decisiones de la libertad individual. Es que en ellos, señor presidente, no existe el conflicto, entre ricos y pobres.

La nueva legislación del trabajo, desconociendo los principios clásicos sobre la libertad de contratar, construye el marco dentro del cual deben desarrollarse las relaciones jurídicas entre patrones y obreros.

Los códigos civiles modernos, desde el francés, o de Napoleón, descansan

sobre la concepción individualista del derecho, contra la que hoy se elabora un sistema jurídico nuevo, fundado en el principio más realista del interés social.

El sistema clásico, explica Duguit, se basa en el derecho subjetivo del individuo, o sea en el poder de una voluntad para imponerse como tal a otra o más voluntades, queriendo una cosa no prohibida por la ley. En el nuevo, es la regla o el interés sociales los que se imponen al individuo.

El principio civilista se funda en la «autonomía de la voluntad», o sea el derecho de crear por un acto de voluntad una situación jurídica en el «derecho de propiedad», definido como uso, goce y disposición absolutos de una cosa; en el «contrato», que es la situación de derecho determinada por el acuerdo de dos o más voluntades, que limitan recíprocamente su esfera jurídica; y en «la responsabilidad por culpa», según la cual quien sin derecho ocasiona un perjuicio a otro está obligado a repararlo.

El interés social, defendido por el Estado, y traducido en la ley, reduce, hasta anularlos, los viejos principios de la libertad individual, de la propiedad, de los contratos y de la responsabilidad.

El Código francés, como el argentino, establecen la «responsabilidad subjetiva», la que directa o indirectamente está determinada por un acto de voluntad. De acuerdo con ella, sólo es responsable el que por su culpa causa un daño a otro. Según ese principio, el obrero — que se lesiona en el trabajo sólo podría exigir indemnización cuando probara la «culpa» del patrón. En Inglaterra, hasta 1897, año en que se aprueba su primera ley sobre la materia, los jueces defienden sin punto de vista más estrecho todavía: el del *common employment*, o del «trabajo en común», basado en la presunción de que el obrero, desde que formaliza su contrato, asume voluntariamente los riesgos que se producen en el trabajo realizado en común.

En Francia, en cambio, la jurisprudencia se adelanta a la ley. Resuelve el «traslado de la prueba»; esto es, declara al patrón responsable de todo accidente, a menos que pruebe la culpa de la víctima. En ese mismo país su primera ley de accidentes de Abril de 1898, ampliada y completada en 1906, consagra el principio de la «responsabilidad objetiva»; presume la culpabilidad del patrón; éste no puede eximirse de ella probando que ha mediado culpa o torpeza del obrero; sólo podría eludirlo demostrando que éste se ha lesionado voluntariamente.

Las leyes especiales sobre accidentes — todas — se alzan contra el sistema individualista del derecho subjetivo. Si, según éste, las relaciones jurídicas, de obreros y patrones, y sus consecuencias, sólo pueden ser condicionadas por el contrato, por el acuerdo previo de dos voluntades, es evidente que no puede admitirse — no establecida la responsabilidad en el contrato — ninguna otra fuera de la derivada de la «culpa». En el nuevo derecho, en cambio, se contemplan por encima del contrato, de las voluntades individuales que intervienen en su elaboración, los dos grandes elementos sociales: el capital y el trabajo. Como éstos corresponden a funciones o valores sociales, son amparados por la ley. El accidente y la enfermedad profesional plantean el problema de quién debe cargar con los riesgos: ¿el capital, el trabajo o los dos juntos? El legislador ha decidido que siendo el capital el que recibe todo el beneficio de la empresa, él debe soportar los riesgos de la misma, entre los que se incluyen los accidentes del trabajo.

La nueva legislación afirma, en general, estos principios: la presunción de culpabilidad del patrón; la obligación, para éste, de probar la culpa grave del obrero — en algunas leyes sólo el accidente intencional — si quiere eximirse de responsabilidad; percepción por la víctima, o sus herederos, de una indemnización cuyos

límites se fijan prescindiendo del perjuicio real.

Debe hacerse notar, también, que toda la legislación obrera de nuestro país ha destruído ese viejo principio de la libertad de contratación, que con tanto ahínco se ha defendido en las recientes sesiones del Honorable Senado.

La misma ley de accidente del trabajo, que impone a los empleadores, sin culpa de éstos y sin que se hayan contraído voluntariamente por contrato, obligaciones veinte veces más onerosas que las de esta modestísima ley de amparo para los empleados de comercio, ha barrido con la doctrina que contesto; doctrina que, por otra parte, es una simple creación del legislador, que no puede ser inmutable y hasta que repugna al espíritu de nuestra Constitución, que quiere hombres libres y no esclavos, justicia y no privilegios.

La ley de accidentes del trabajo limita la voluntad del empleador para imponer condiciones que no puede discutir la voluntad del que en realidad no la tiene, porque le falta el dominio de la herramienta y de la materia prima, que necesita para su trabajo. Podría seguir citando las leyes sobre el trabajo de la mujer y del niño; sobre descanso dominical; las que han fijado un máximo de horas de labor y un mínimo de salario, para evidenciar hasta qué punto desaparecen los vestigios de esa famosa fórmula del «contrato», descubierta ahora para negar lo que reclaman los empleados de comercio del país, cuya cifra se elevaría, según la Confederación Argentina de la Industria y del Comercio, que la ha consignado en una nota enviada el año anterior a esta Cámara, a más de 880.000, en su mayoría argentinos.

El mismo proyecto del Senado, que es substancialmente distinto al votado por esta Cámara, destruye el fundamento jurídico en que se apoyaba el rechazo de la indemnización por despido; mantiene la indemnización por enfermedades o accidente inculpables,

ya incorporada al código vigente; acepta las ~~dicencias~~ anuales pagas en períodos variables según la antigüedad, y admite la obligación de preavisar la cesantía, es decir, reconoce la intervención de la ley para imponer obligaciones ~~no~~ contractuales. ~~No puede sostenerse~~, entonces, seriamente, que so pretexto de ser extraña al contrato, no puede imponerse la obligación de indemnizar por cesantía en el trabajo.

No cabe argumentar con aquello del vencimiento del contrato, que excluye nuevas obligaciones, ya que la fórmula jurídica que hemos adoptado significa añadir a todo contrato de empleo la condición legal, impuesta por la ley por encima de la libertad de las partes, de que al terminarse deberá el principal pagar al empleado una indemnización proporcional a sus años de servicios.

Es, la expresada, una fórmula sencilla, precisa y diáfana, que no se presta a complicación alguna ni a dificultades de su aplicación.

Son tan mezquinos los beneficios que el proyecto del Senado promete a los empleados de comercio, que con razón el diario «La Prensa», al que no se podría tildar de parcial en favor de los empleados, ha levantado su voz para denunciarla como algo incomparable con los derechos legítimos de sus presuntos beneficiarios.

Dice en uno de sus editoriales, aparecido en el número correspondiente al 12 del presente mes: «La sanción de la Cámara de Diputados concilió de esta manera la necesidad de amparar a los empleados de comercio en su ancianidad o invalidez y contra la arbitrariedad en todo tiempo, con las posibilidades de sus principales. No es justo obligar a éstos a constituir un capital para cada uno de sus empleados pero tampoco lo es que los hombres que han servido muchos años a una firma mercantil y generalmente contribuido a su prosperidad, sean despedidos sin ninguna indemnización cuando la edad los vuelve menos eficientes.

«Desgraciadamente, el proyecto ha sido reducido en la Comisión de Códigos

gos del Senado a proporciones irrisorias. En el despacho de la mayoría de la misma se conserva toda su armazón pero se reduce la indemnización por despido sin aviso previo, a un mes de sueldo para el empleado que cuenta de tres meses a cinco años de antigüedad; a dos meses de sueldo, para el que tiene de cinco a diez años de servicios; y a tres meses para el que tiene más de diez años. El despacho de la minoría es igual a la sanción de la Cámara de Diputados.

«En nuestro país los empleados y obreros se dividen en dos categorías, de las cuales una es privilegiada, otra no. Constituyen la primera los que prestan servicios a los gobiernos, a las municipalidades de alguna importancia, a empresas ferroviarias, telefónicas, de alumbrado y a los bancos. Estos gozan de un retiro a los veinticinco o treinta años de servicios y tienen algunos — como los ferroviarios — garantías relativas de estabilidad y mejoramiento progresivo. Los de la segunda categoría no tienen seguridad de ninguna clase y están a merced de sus empleadores.

«La bondad y la rectitud de éstos no son suficiente garantía para sus servidores porque esas bellas prendas personales no suelen llegar a inspirar la previsión en beneficio de los subordinados. El comerciante mejor intencionado deja frecuentemente en la calle a sus viejos empleados.

«Por todas estas razones — termina el editorial — el proyecto de amparo a los empleados de comercio, tal como lo aprobó la Cámara de Diputados, vendría a satisfacer una verdadera necesidad social. Pero lo que ha propuesto la mayoría de la Comisión de Códigos del Senado carece de importancia para los fines de justicia y equidad antes expuestos y deja a ese gremio tan meritorio y tan importante en el desamparo actual.»

No aceptamos — ya lo ha dicho el señor diputado Courel — ninguna de las modificaciones del Honorable Senado, porque todas ellas, y en razón de haberse eliminado la indemnización

por despido, quiebran la trabazón armónica de nuestro proyecto, que perdería eficacia, y yo diría que hasta su elegancia legal, si se dejara expuesto a remiendos que responden a definiciones teóricas de una escuela jurídica distinta a la que ha inspirado a la Cámara joven del Congreso.

El proyecto del Senado suprime también la indemnización en caso de muerte del empleado; elimina las disposiciones sobre substitución de las obligaciones del empleador por un seguro constituido a favor de los empleados que ocupa; disminuye a la mitad la indemnización en caso de enfermedad o accidente, después de tres meses de paro en el trabajo; suprime sin motivo la definición de los empleados de comercio que contiene nuestro artículo 1º y que luego conserva en disposiciones posteriores del mismo proyecto; excluye el preaviso en los empleos de término fijo y niega la posibilidad de la reconducción de los contratos de trabajo y la unión de los sucesivos para determinar la antigüedad en los servicios; y, por último, crea tantas causas por parte del obrero para cohonestar la rescisión de los contratos por los empleadores, que suprime hasta la más remota posibilidad de que los empleados puedan librarse de los caprichos del principal y de perder su trabajo sin obligación alguna para éste.

Ante un vuelco tan radical; ante el alud que ha pasado sobre el proyecto de esta Cámara, la Comisión de Legislación no ha tenido otro recurso, en defensa de su punto de vista, seria y prudentemente elaborado, que aconsejar la insistencia, sin ninguna reforma, en el proyecto que sancionamos el año pasado por unanimidad.

¡No habremos dado, señor presidente, todo lo que esperaban los empleados de comercio; pero la Cámara evidenciará ante el país que cuando promete un beneficio sabe otorgarlo, si no muy generosamente, con la seriedad a que nos obliga el prestigio del Congreso argentino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Prolongados aplausos en las bancas y en las galerías).

**Sr. Dickmann (A.).** — Pido la palabra.

Los discursos que acaba de escuchar la Honorable Cámara pronunciados por los señores diputados por Córdoba y por la Capital, aun cuando breves, tan conceptuosos y concisos que dejan totalmente replicado el largo y fundado debate producido en el Honorable Senado, y, me eximen de entrar en detalles. Por otra parte, no quiero prolongarlo a fin de que la ley pueda tener su última tramitación; y digo «última», recalcando la palabra, como una especie de invocación al patriotismo del Honorable Senado.

Si fuera a recordar la historia de esta ley, sería el capítulo más sucinto de todas las peripecias porque tiene que pasar legislación de esta naturaleza antes de llegar a su sanción. La voy a hacer de un brochazo: apenas un esbozo ya que creo con fundamento, que es el último debate a su respecto.

Presentado por primera vez en 1915 por nuestro ilustrado senador y entonces diputado por la Capital, doctor Palacios, es renovado en 1919 por los diputados radicales Bonifacio y Rodríguez. En 1926 a nombre del bloque socialista, se inició por el ex diputado doctor Héctor González Iramain; reproducido, por haber caducado, en 1928 por el mismo diputado. En el mismo año presentaron proyectos análogos los ex diputados señor Guillot, radical y señor Míguez, conservador. Discutido en 1928, después de un luminoso informe del ex diputado doctor Antonio de Tomaso fué enterrado elegantemente con un discurso fundado desde su punto de vista por el ex diputado Ferrarotti. En 1929 lo ha revivido no solamente con nuevos bríos, sino con una nueva estructura, el diputado que habla, que desde entonces está bregando para que este proyecto sea ley, para bien y tranquilidad de más de ciento veinte mil hombres y mujeres y sus respectivos hogares...

**Sr. González Maseda.** — Ha habido alguna otra iniciativa posterior a esa fecha.

**Sr. Dickmann (A.).** — Disculpeme, señor diputado; había olvidado la iniciativa del señor diputado por la Capital, de 1932, reproduciendo textualmente el proyecto de González Iramain.

**Sr. Ruggieri.** — Pero conviene aclarar que el artículo fundamental del proyecto presentado por el sector socialistas independiente fué votado en contra, en el recinto, por los diputados que lo integran, en votación nominal; el que se refiere al reconocimiento sin límites de la antigüedad en el servicio.

**Sr. Sierra.** — Que no figuraba en ningún proyecto y que nosotros hemos contribuido a limitar, precisamente, para obtener la sanción rápida de la ley.

**Sr. Ruggieri.** — Los dos proyectos no establecían límite en la antigüedad y los señores diputados la redujeron a cinco años contra el voto de los diputados del sector socialista.

**Sr. Dickmann (A.).** — El miembro informante del Senado, el ilustrado senador por San Luis, ha dicho palabras de justicia para nuestra iniciativa y las ha caracterizado en forma concisa y completa. Dijo el señor senador: «Muy altruistas sus propósitos y muy convenientes la mayoría de sus proposiciones. Las dificultades principales que se encuentran para su sanción radican, precisamente, en que no es posible involucrar o acoplar en un artículo del Código de Comercio todas las cuestiones sociales y los puntos de estricto derecho obrero que se les quiere introducir en base a una reforma tan general y amplia como la que se proyecta».

Y más adelante, después de analizar y recordar los proyectos que acabo de citar, dice respecto del mío: «Después, aparece el proyecto del diputado Adolfo Dickmann, que es el único que se diferencia en esta materia de todos los demás, modificando substancialmente ya el régimen del despido y contratos legislados por este código».

Las objeciones que el señor senador por San Luis hacía al proyecto votado por la Cámara de Diputados, pueden sintetizarse en general, en dos. En particular, esas objeciones han sido

contestadas por los diputados preopinantes.

Sostiene el señor senador que las reformas por nosotros votadas no caben dentro de la estructura del Código de Comercio y sostiene también que algunas de sus disposiciones son inconstitucionales.

La primera objeción le fué contestada con sus propios argumentos. Siempre hay para las ideas de uno, alguien que está más a la derecha o más a la izquierda. El señor senador por San Luis, que es un eminente conservador, tiene en las bancas de su sector a un senador tan eminente pero más conservador: el señor senador por Catamarca. Y el señor senador por Catamarca imputó al señor senador por San Luis lo que éste nos imputa a nosotros: la reforma por él aconsejada tampoco cabe en el Código de Comercio.

Es, pues, una cuestión de disputa entre distinguidos juristas. Entretanto, la vida se desenvuelve en toda su amplitud y las brechas se abren en el Código de Comercio y en otros códigos pese a las opiniones de la derecha y de la izquierda del conservadurismo del Honorable Senado.

Y en cuanto a la objeción de inconstitucionalidad — ya lo ha dicho mi distinguido amigo y colega, el doctor Ruggieri — fué contestada brillantemente por el viejo pero siempre renovado y siempre joven de espíritu, senador por Tucumán.

Quiero leer sus palabras, señor diputados, por la autoridad que tienen y por la síntesis admirable que significan. Decía el señor senador: «Cuando el señor miembro informante de la comisión, hablaba de la inconstitucionalidad de este proyecto, me alarmé, señor presidente». Me lo imagino al señor senador por Tucumán, profesor de derecho constitucional, cuya piel se hace de gallina cuando alguien habla de la violación de la Constitución.

«He recorrido desde el artículo 1º hasta el 110 de la Constitución, para ver si alguno impide la protección legal de los dependientes de comercio, y no he encontrado, señor presidente,

ninguna disposición que se oponga a esa protección legal.»

Y más adelante agrega: «Lejos, señor presidente, de que se oponga la Constitución a la protección de los débiles contra los fuertes, vemos en el preámbulo de la Constitución autorizada esa protección, cuando dice que uno de los objetos fundamentales de la Constitución, es «afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el territorio argentino».

«¿Es o no es afianzar la justicia intervenir entre el fuerte y el débil para hacer respetar los derechos del débil? ¿Es o no es promover el bienestar general, impedir que se establezcan estos conflictos que pueden alterar la paz de la sociedad argentina, más o menos profundamente, según la entidad que los promueva? ¿Es o no es asegurar los beneficios de la libertad, garantizar que la voluntad del patrón no será predominante en absoluto sobre la voluntad del dependiente o del empleado?»

Estas son las consideraciones que nos deben guiar en el voto que daremos insistiendo en nuestra primitiva sanción.

Hace honor al Parlamento argentino la discusión de esta ley, especialmente la forma en que fué hecha en el Honorable Senado. Deben haber sido poderosos los argumentos sostenidos en las brillantemente exposiciones de los senadores Palacios y Bravo para que la votación arrojara diez votos contra nueve, mediando la ausencia de varios señores senadores que eran partidarios decididos del proyecto tal como lo había votado la Cámara de Diputados. Si hoy no hay ley, es por una circunstancia puramente fortuita.

No desearía en esta enunciación que haga de citas y nombres, olvidarme de un discurso breve, pero muy vívido del señor senador por Córdoba que hizo una argumentación de orden político y social en favor del proyecto, re-

cordando la evolución de la legislación del trabajo y reivindicando para su provincia el honor de haber seguido los pasos iniciados en el Congreso nacional por la diputación socialista.

Es siempre grato poder constatar que las propias ideas son recogidas y mejoradas en otras partes y por otros hombres.

Espero, señor presidente, que la peregrinación de esta ley termine; que pongamos buena fe en lo que votamos; que no perjudiquemos con nuestra demora parlamentaria — lenta de por sí — al gremio de dependientes de comercio de la República.

He dicho muchas veces en el seno de la Cámara, en las asambleas populares, en las entrevistas con el presidente de la República reclamándole la inclusión del proyecto en las sesiones extraordinarias del año pasado, en el despacho del señor vicepresidente de la Nación solicitándole que fuera tratado por el Senado al final de las sesiones de ese año: no votar la ley es peor que rechazarla.

Y hago por fin, una última invocación al Honorable Senado: este proyecto debe tener sanción en el presente período de sesiones, porque así lo exige la ilustración de ese cuerpo, su capacidad y su altura de miras y la dedicación dispensada a esta ley. Si las convicciones de los señores senadores son tan firmes, manténganse en ellas, voten libremente, para eso tenemos el sistema bicamarista; pero pronuncien se y déjenos la posibilidad de dar la última sanción. Sobre todo, impidamos que entre tanto, cierto capitalismo, que no entiende a veces sus propios intereses, que no comprende que esta clase de leyes son una garantía de paz social, aproveche para deshacerse de los viejos y meritorios empleados, muchos de los cuales han elaborado con él su fortuna y su bienestar.

Y a los dependientes de comercio yo les digo desde esta alta tribuna: si han tenido serenidad y paciencia en la lucha hasta ahora ténganla otro poco más y el triunfo habrá coronado nuestra obra!

Nada más. (*Prolongados aplausos en la barra*).

**Sr. Presidente** (Escobar). — Preven- go a la barra que por el reglamento le está prohibido hacer manifestaciones.

**Sr. Sierra**. — Pido la palabra.

Después del discreto y breve discurso del miembro informante de la comisión, que en su despacho, firmado por los representantes de todos los sectores y que yo suscribo en representación del grupo parlamentario socialista independiente, aconseja insistir en la sanción anterior, me parecía innecesario pronunciar nuevos discursos, que sólo sirven para hacer interminables los debates y para retardar sanciones como ésta, que es esperada por una buena parte de la opinión pública del país. Pero, señor presidente, las manifestaciones de los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, imponen las que ahora pronuncio.

Nuestro grupo está ligado a esta reforma legislativa. Los señores diputados socialistas que han tenido oportunidad de hablar esta tarde han recordado algunos antecedentes parlamentarios que nos pertenecen. Ya se dijo que en 1926 el entonces diputado nacional, doctor Héctor González Irujo, tuvo oportunidad de presentar en nombre del grupo socialista, en ese entonces unificado, una iniciativa tendiente a modificar las disposiciones del Código de Comercio, referentes a los empleados. En 1928 ese proyecto tuvo necesidad de ser reproducido. Despachado por la comisión respectiva, el entonces diputado Antonio de Tomaso tuvo oportunidad de informarlo y de explicar las razones de la reforma. Durante el período ordinario de 1932 el diputado González Maseda, miembro de nuestro grupo, presentó un proyecto que llevaba la firma de todos los componentes del mismo y que tendía a reformar el Código de Comercio en lo referente a los empleados, en relación al despido y a la indemnización. Ha habido también la

iniciativa del año pasado, del sector socialista.

Todos hemos colaborado con el mejor propósito en la elaboración del despacho cuya insistencia aconsejamos; todos hemos puesto para conseguir la sanción de esta ley la mayor buena voluntad; la capacidad que tenemos, y hemos utilizado los antecedentes parlamentarios argentinos.

Estamos ahora en condiciones de dar un voto en cierto modo definitivo. Tuve oportunidad de manifestarlo el año pasado en ocasión de considerarse el aspecto relativo a la retroactividad de la ley, aspecto que al votarse nominalmente contó con nosotros para que fuera limitado a cinco años y no a diez como lo proponía la comisión, en la forma que lo señaló el diputado Ruggieri, no sin dejar perfectamente explicada nuestra posición en aquel debate, tuve oportunidad de decir entonces lo que ahora es una verdad indiscutible: que cuanto más limitado fuera el proyecto que sancionara la Cámara menos dificultades encontraría para ser convertido en ley. Es así como en la votación nominal referente a la retroactividad nosotros hemos votado por que la limitación fuera de cinco años y no de diez como lo proponía la comisión, y hemos colaborado también para que se fijara medio mes de sueldo y no un mes, y para que el límite máximo de la indemnización fuera de 500 pesos.

Esas tres importantes cuestiones son, precisamente, las que por su carácter limitado, normal, aceptable, dentro de nuestra legislación, nos permiten poder insistir — como lo he de hacer seguramente la Cámara por unanimidad dentro de un momento, con la conformidad de todos los sectores — en la primera sanción de la Cámara.

Nosotros creemos en esta legislación constructora y renovadora. Nosotros creemos que al modificar el Código de Comercio en el sentido que lo hacemos en 1933, seguimos las líneas tradicionales de la mejor política legislativa argentina, y le damos a esta reforma

la trascendencia social y política que necesariamente debe tener. Pero si aceptamos eso, no estamos dispuestos a ser utilizados políticamente por ningún grupo parlamentario. En ese sentido doy a mis palabras el alcance que deben tener. Somos contrarios a las fórmulas legislativas y códigos inmutables a los principios intangibles. Si hemos colaborado en la preparación, de pacho y sanción de esta ley, lo hemos hecho convencidos de que incorporamos a nuestra legislación positiva, principios necesarios que han sido alcanzados antes que nada por el progreso social, político e institucional a que ha llegado nuestro país.

Llevamos al seno de la enorme masa de empleados de comercio un aliciente más para que continúen trabajando en favor del progreso general y para que continúen elaborando la Argentina del mañana que todos deseamos. Pero en esa posición estamos casi todos o todos los diputados que se sientan en este recinto. Y por eso la reforma, que en un principio tuvo contenido socialista, la reforma que en un principio pudo aparecer como algo inaceptable dentro de nuestro régimen comercial, y es hoy una cosa conquistada con el esfuerzo de todos y por el esfuerzo de cada uno de los hombres que han puesto al servicio del progreso social argentino toda su buena voluntad y toda su capacidad, y que han venido a estas bancas para utilizar los antecedentes parlamentarios en beneficio de la colectividad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Escobar). — Se va a votar.

De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución nacional se debe resolver si se aprueba o no, las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley. La comisión aconseja el rechazo de las modificaciones votadas por el Honorable Senado.

**Sr. Grisolia.** — Lo que debe votarse es el despacho de la comisión.

**Sr. Dickmann (A.).** — Hay que votar constitucionalmente, en la forma que acaba de indicar la Presidencia.

**Sr. Ruggieri.** — Pido que se lea el artículo 71 de la Constitución.

**Sr. Presidente (Escobar).** — Se leerá por Secretaría.

—Se lee:

Artículo 71. — Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuese adicionado o corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen; y si en ésta se aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasará al Poder Ejecutivo de la Nación. Si las adiciones o correcciones fuesen desechadas, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora..., etcétera.

**Sr. Presidente (Escobar).** — Se va a votar si se aceptan las modificaciones votadas por el Honorable Senado.

—Se vota y resulta negativa en general.

**Sr. Courel.** — Hay unanimidad.

**Sr. Ruggieri.** — ¿Hubo algún voto favorable para la sanción del Senado?

**Sr. Presidente (Escobar).** — Por unanimidad han sido rechazadas las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley. (*Aplausos*).

**Sr. Ruggieri.** — Solicito de la Honorable Cámara que preste su asentimiento a la Presidencia para que se comunique de inmediato la sanción que acaba de recaer en el proyecto sobre modificación de los artículos del Código de Comercio.

**Sr. Presidente (Escobar).** — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Escobar).** — Interpretando la adquiescencia de la Honorable Cámara, se hará la comunicación pertinente para este asunto y los otros sancionados por la Honorable Cámara.

—Asentimiento.

10

## PRORROGA DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS

Orden del día número 181

Honorable Cámara: —

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General han considerado el proyecto de ley presentado por los señores diputados Pueyrredón y Ruiz Guinazú sobre prórroga de las obligaciones hipotecarias, que le fuera pasado en revisión al Honorable Senado; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja insistir en vuestra sanción.

Sala de la comisión, Septiembre 21 de 1933.

*Abraham de la Vega.* — *Luis Griso-*  
*lla.* — *Adolfo Dickmann.* — *B. Al-*  
*barracín.* — *J. M. Bustillo.* — *P.*  
*Gropp.* — *J. Simón Padrós.* —  
*Raúl Godoy.* — *Julio A. Noble.* —  
*C. G. Colombres.* — *Enrique Dick-*  
*mann.* — *J. F. Morrogh Bernard.*  
— *P. Abalos.* — *M. A. Bermúdez.*  
— *M. Antelo.* — *J. H. Martínez.*  
*Nicolás Repetto.* — *Héctor S. Ló-*  
*pez.* — *R. Bogliolo.* — *A. Ghioldi.*

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1933.

*Señor presidente de la Honorable Cámara de*  
*Diputados de la Nación.*

Tengo el honor de comunicar al señor presidente que el Honorable Senado, en sesión de la fecha ha considerado el proyecto de ley venido en revisión sobre moratoria hipotecaria y ha tenido a bien aprobarlo en la siguiente forma:

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Las obligaciones garantidas con hipoteca que se encuentren vencidas, o que antes de la vigencia de esta ley se hayan hecho exigibles por falta de pago de los intereses o amortizaciones convenidos, quedan prorrogadas por el término de tres años, a contar desde el día de su vigencia.